

EL SECTOR DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN 2013, OTRO AÑO PARA OLVIDAR

El año 2013 volvió a ser otro año extremadamente duro para el sector relacionado con la gestión de residuos peligrosos. Al bajo nivel de actividad, producto de la crisis económica, se suma la competencia desleal que lleva a toda esta industria medioambiental a un entorno de pura supervivencia.

A pesar de que aún no disponemos de los datos de 2013, sí podemos poner de relieve los de 2012, que muestran cómo la actividad del sector de la gestión de residuos peligrosos ha caído un 40% en los últimos cuatro años, lo que ha producido la pérdida de la mitad de los empleos.

Estos datos tan preocupantes han llevado a ASEGRE a llamar la atención sobre las prácticas de gestión más dudosas, como son la realización de operaciones de gestión sin documentación, las recogidas ilegales de residuos peligrosos y gestiones en instalaciones sin autorizar. Por otro lado, muchas de estas malas prácticas son además claramente perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las personas. Dentro de este grupo cabe destacar la incorporación de residuos al suelo de forma incontrolada, el vertido directo de residuos al suelo o al agua, o la mezcla de residuos peligrosos con otros residuos para diluir su peligrosidad y abaratar su gestión.

La respuesta de las distintas administraciones ante estas denuncias está siendo desigual, algo muy característico en todo lo relativo a las políticas medioambientales, que siguen careciendo de un denominador común que establezca las mismas reglas de juego para todos los actores implicados. La ausencia de una política común de residuos para todo el país provoca una diferenciación en los estándares medioambientales exigibles a las empresas. No es descartable que, producto de este escenario que no se acaba de resolver, estén aumentando las malas prácticas a las que hacíamos referencia anteriormente.

A pesar de estos déficits en materia legislativa, en 2013 sí ha habido alguna novedad importante en este ámbito. En este sentido, cabe destacar la modificación de la Ley IPPC, que ha supuesto la actualización de las Autorizaciones Ambientales Integradas de las instalaciones afectadas y la realización de informes de base sobre la situación del suelo. Estos informes se han realizado de una forma un tanto heterogénea, posiblemente motivado porque se partía de distintos niveles de contenido. Las diferencias encontradas en estos informes han sido más relevantes en el caso de los informes de base del suelo. A partir de ahora, sería deseable que se redujeran esas diferencias aprovechando el criterio que ha establecido la Comisión Europea en su propuesta de informe. De cualquier forma, hay que valorar positivamente el esfuerzo que han realizado administraciones y empresas para cumplir el plazo establecido, que vencía el 7 de enero de 2014.

Una vez analizado el pasado 2013, el nuevo año parece mostrar algunos síntomas de recuperación de nuestra economía, si bien el sector de los residuos será uno de los últimos en percibir esa mejora y funcionará, una vez más, como uno de los indicadores más fiables para constatar si la recuperación ha llegado realmente.

Desde ASEGRE confiamos en que las advertencias que venimos realizando, sumado a los procesos abiertos por los órganos com-

2013, ANOTHER YEAR TO FORGET FOR THE HAZARDOUS WASTE SECTOR



Luis Palomino,
Secretario General de ASEGRE
Secretary General of ASEGRE
(Spanish Association of Hazardous
Waste Managers)

2013 was another extremely difficult year for the hazardous waste sector. The low level of activity caused by the economic crisis was compounded by the unfair competition that has brought this environmental industry to a position where the objective is simply survival.

Although we do not yet have the 2013 figures, those for 2012 indicate that activity in the hazardous waste management sector fell by 40% in the previous four years, with the resulting loss of over half the jobs in the sector.

These very worrying figures have led ASEGRE to put the spotlight on the more dubious management practices, such as the carrying out of management operations without the necessary documentation, illegal collection of hazardous waste and waste management at unauthorised facilities. Moreover, many of these bad practices are also damaging to the environment and human health. Such practices include adding waste to the soil in an uncontrolled manner, direct disposal of waste on land or in water and the mixing of hazardous waste with other waste to dilute its dangerous properties and reduce the cost of management.

The response of the different public authorities to these complaints has been mixed, which is very common in everything related to environmental policies, which continue to lack a common denominator to set out the same rules for all actors involved. The absence of a common waste policy for the entire country leads to differentiation in the environmental standards companies are required to meet. It cannot be ruled out that this scenario, which has yet to be resolved, may be contributing to an increase in the aforementioned bad practices.

Despite the ongoing legislative deficiencies, 2013 did see an important new development in this area. A highlight was the amendment to the IPPC Act, which means the updating of the Integrated Environmental Authorisations of the affected facilities and the drawing up of baseline reports on the state of the soil. These reports have been drawn up rather heterogeneously, possibly due to the fact that they are based on different content levels. The differences found in these reports have been most relevant in the case of baseline reports on the state of soil. From now on, it would be desirable to see a reduction in these differences, availing of the criteria set out by the European Commission in its report proposal. In any case, a positive view must be taken of the efforts of public administrations and companies to comply with the deadline, which was set for January 7th 2014.

Moving on from the analysis of 2013, the arrival of 2014 seems to have brought with it some signs of recovery in our economy, although the waste sector is likely to be amongst the last to perceive this improvement and will serve, once again, as one of the most reliable indicators in terms of demonstrating that recovery has really arrived.

At ASEGRE, we trust that the warnings we have given, in addition to the action taken by the relevant authorities and

petentes y la administración de justicia, puedan encauzar la gestión de residuos en España hacia unas prácticas más rigurosas. Esto será beneficioso para el medio ambiente pero también para la creación de empleo. Es un punto vital que deben entender nuestras autoridades ya que, tal y como alertó la Comisión Europea en su estudio *Implementing EU Waste Legislation for Green Growth* (2011), una aplicación más rigurosa de la legislación vigente en la Unión Europea se puede convertir en una fuente de empleos verdes reales y un modo de reindustrializar el continente.

Este informe mencionado anteriormente se ha visto reforzado en 2013 con la aprobación del Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020, titulado "Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta". Este programa reconoce que los residuos no se gestionan de manera adecuada y plantea la necesidad de ejecutar íntegramente la legislación de residuos de la Unión Europea, además de que los residuos peligrosos se gestionen sin riesgos y se eliminen los traslados ilegales de residuos con la ayuda de una estrecha vigilancia.

En cualquier caso, necesitamos que todo este impulso que proviene de Bruselas se traduzca en una decisión política clara de nuestras autoridades que busque atajar las malas prácticas que estamos encontrando. El primer síntoma que mostraría que se ha recogido el testigo de las instituciones europeas sería el refuerzo de las actividades de inspección y control. El año 2014 parece el momento propicio para la introducción de estas medidas, aprovechando que en 2013 se ha iniciado la revisión de los planes de residuos de algunas Comunidades Autónomas, a los que previsiblemente se unirán otras en 2014, a la vez que se desarrolla el nuevo Plan Nacional Integrado de Residuos.

Además, tal vez en 2014 lleguen las tan anunciadas medidas sobre fiscalidad ambiental. Debería plantearse que parte de lo recaudado con estos, previsibles, nuevos impuestos se destine a apoyar las medidas de control que garanticen la aplicación efectiva y homogénea de la legislación de residuos. Cabe reseñar, que por el momento, sólo se ha concretado en el impuesto sobre los gases fluorados, que esperamos resuelva un grave problema ambiental con el menor impacto económico posible.

Por lo demás, 2014 nos traerá dos nuevas normas que son decisivas para el sector, en concreto las relativas al traslado de residuos y a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estas normas pueden ser un punto de apoyo que sirvan para parar la caída o pueden ser la puntilla para el sector. Desde ASEGRE nos esforzaremos para que sean lo primero: un elemento clave para la necesaria recuperación de un sector que resulta vital para cualquier sociedad avanzada que quiera generar una industria de valor que protege el medio ambiente y la salud de las personas.



the judiciary, will be sufficient to channel waste management in Spain towards better practices. This would be beneficial for the environment and would also serve to create jobs. This is a vital point that our authorities need to grasp because, as the European Commission highlighted in its *Implementing EU Waste Legislation for Green Growth* (2011) study, more stringent application of current legislation in the European Union could provide a real source of green jobs and a way in which to reindustrialise the continent.



The aforementioned study has been reinforced by the General Union Environment Action Programme to 2020 entitled "Living well within the limits of our planet". This programme recognises the fact that waste is not being adequately managed. It underlines the need for full implementation of European Union waste legislation, the need for hazardous waste to be managed without risk and the need for illegal waste transfers to be eliminated through strict monitoring.

In any case, we need all this impetus coming from Brussels to manifest itself in the form of a clear political decision on the part of our authorities in Spain to put a halt to the bad practices currently in existence. The first sign that the example set by European institutions is being taken on board would be an increase in inspection and control activities. 2014 seems like a good time for the introduction of such measures, availing of the fact that 2013 saw a review of waste plans in a number of Autonomous Communities. Other Autonomous Communities are expected to follow suit in 2014, a year which will also witness the drawing up of the new National Integrated Waste Plan.

Moreover, in relation to environmental taxation, which may come into effect in 2014, consideration should be given to devoting part of the proceeds of these foreseeable new taxes to supporting control measures that guarantee the effective and homogenous application of waste legislation. It should be pointed out that, thus far, the only new tax to be specified is that on fluorinated gases, which we hope will help to solve a serious environmental problem with the minimum possible economic impact.

2014 will also bring with it two new pieces of legislation of vital importance to the sector. This legislation relates to waste transfer and waste electrical and electronic equipment. The new legislation may be instrumental in providing the necessary support to put a stop to the fall of the sector or it may prove to be the final nail in the coffin of this industry. At ASEGRE, we will be striving to ensure that proves to be the former: a key element for the much-needed recovery of a sector that is vital to any advanced society wishing to generate an industry of value that protects the environment and the health of people.